



SITUACIONES DE URGENCIA*

Eva KREISLER

I. INTRODUCCIÓN

Las dependencias ambientales suelen enfrentarse a situaciones que requieren una respuesta rápida, dada la amenaza que implican para la salud humana o el medio ambiente. Por ejemplo, cuando se desborda una tubería de aguas negras sin tratar en cursos de agua públicos, o se ha eliminado asbesto incorrectamente cerca de alguna escuela o parque. A fin de encarar estas situaciones de urgencia, se otorga a las dependencias ambientales facultades para enfrentar los riesgos inminentes y sustanciales, de tal manera que puedan emitir resoluciones dirigidas a requerir acción inmediata para prevenir amenazas contra el medio ambiente o la salud pública. Estas resoluciones, exigibles en tribunales, dictan un curso de acción específica o restringen la actividad causante del riesgo.

En este artículo se proporciona una amplia descripción general de las distintas facultades para enfrentar riesgos inminentes y sustanciales en Estados Unidos. Durante el seminario, los panelistas suministrarán un análisis más detallado de todos o algunos de estos instrumentos legales.

II. FACULTADES PARA ENFRENTAR RIESGOS INMINENTES Y SUSTANCIALES EN ESTADOS UNIDOS

En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (*Environmental Protection Agency*) cuenta con varias facultades legales para encarar situaciones de urgencia. Estas disposiciones se incluyen en la normativa ambiental y fueron elaboradas en términos generales por el Congreso a

* 2008.

fin de otorgar a la EPA el derecho de buscar medidas judiciales o emprender las acciones inmediatas correspondientes para eliminar las amenazas a la salud humana y al medio ambiente.

Las facultades para enfrentar riesgos inminentes y sustanciales en Estados Unidos están contenidas en la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (*Resource Conservation and Recovery Act*),¹ la Ley Integral de Respuesta (*Comprehensive Environmental Response*), la Ley de Compensación y Responsabilidad Ambientales (*Compensation, and Liability Act*),² la Ley de Agua Limpia (*Clean Water Act*),³ la Ley de Agua Potable (*Safe Drinking Water Act*),⁴ la Ley de Aire Puro (*Clean Air Act*)⁵ y la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (*Toxic Substances Control Act*).⁶ Estas facultades son muy similares y la EPA puede combinarlas a fin de reducir las urgencias provenientes de diversos medios.

1. *Ley de Conservación y Recuperación de Recursos*

Las metas de la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) son proteger la salud y el medio ambiente contra los riesgos potenciales de la disposición de residuos, conservar las fuentes de energía y los recursos naturales, reducir la cantidad de desechos generados y garantizar que los residuos se manejen de manera ambientalmente sana.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7003(a) de la RCRA, siempre que el administrador de la EPA reciba alguna prueba que indique que el incorrecto manejo pasado o presente de residuos peligrosos⁷ *puede generar* un “riesgo sustancial e inminente” para la salud o el medio ambiente, podrá emitir una resolución administrativa o dar comienzo a una acción judicial a fin de impedir el manejo, almacenamiento, tratamiento,

¹ Artículo 7003 de la RCRA, 42d USC, § 6973.

² Artículo 106 de la CERCLA, 42d USC, § 9606(a).

³ Artículos 504 (a) y 311 (c) y (e) de la CWA, 33d USC, §§ 1364(a), 1321(c) y (e).

⁴ Artículo 1431 de la SDWA, 42d USC, § 300i(a).

⁵ Artículo 303 de la CAA, 42d USC, § 7603(a).

⁶ Artículo 8 de la TSCA, 15th USC, § 2606(b).

⁷ “Residuo peligroso significa un desecho sólido o una combinación de desechos sólidos, los cuales, debido a sus [...] características, pueden (A) causar o contribuir significativamente a un aumento de la mortalidad o a [...] enfermedades[...] graves; o (B) representar un peligro sustancial actual para la salud humana o el medio ambiente cuando se maneje [...] incorrectamente” (RCRA § 1004[5]).

transporte o desecho de residuos peligrosos por parte de alguna persona.⁸ Así mismo, puede ordenarle a esta persona que proceda a la rehabilitación o emprenda alguna otra medida correctiva necesaria para confinar el riesgo.

Los tribunales han definido el “riesgo” como un daño potencial o real, o una amenaza para la salud humana o el medio ambiente.⁹ La expresión “puede generar” contenida en la ley dispone que el riesgo de daños sólo debe existir, no se requiere demostrar un daño real o inmediato. El riesgo “inminente” existe cuando las condiciones presentes indiquen que puede haber un peligro futuro para la salud o el medio ambiente aún cuando no se materialice en varios años.¹⁰ Por su parte, el riesgo “sustancial” tiene lugar cuando hay una causa justificada de preocupación dado que la salud o el medio ambiente pueden correr peligro.¹¹

La facultad prevista en el artículo 7003(a) de la RCRA puede emplearse, por ejemplo, cuando se descubre que una planta está manejando incorrectamente residuos peligrosos. En esta situación se puede ordenar que la planta detenga de inmediato la recepción de más residuos peligrosos hasta que cumpla con los términos de una resolución que pormenore que se están llevando a cabo medidas correctivas. La inobservancia de la resolución dictada conforme a lo dispuesto en este artículo puede resultar también en una sanción financiera.¹²

2. Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales.

La Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambientales (CERCLA) otorga al gobierno federal amplias facultades para la rehabilitación de sitios contaminados. Su artículo 106 es una disposición redactada en términos generales que difiere del artículo 7003 de la RCRA en cuanto a que autoriza el ejercicio de acciones judiciales o la

⁸ El término “persona” incluye a cualquier generador, transportador, propietario u operador presente o pasado de una planta de tratamiento, almacenamiento y desecho.

⁹ *United States v. Valentine*, 856 F. Supp. 621, 626 (D. Wyo., 1994).

¹⁰ *Idem.* Véase también, *United States v. Conservation Chemical II*, 619 F. Supp. 162, 194 (WD Mo., 1985) y *Dague v. City of Burlington*, 935 F. 2d 1343, 1356.

¹¹ *Conservation Chemical*, 619 F. Supp., en 194.

¹² 42d USC, § 6973(b).

expedición de resoluciones administrativas cuando exista un riesgo inminente y sustancial real o una *amenaza* para el bienestar, la salud pública o el medio ambiente.¹³

En este mismo artículo se prevé que el presidente, una vez determinado que puede haber un riesgo sustancial e inminente para la salud pública, el bienestar o el medio ambiente debido a la descarga o emisión real o a la amenaza de material peligroso, puede ejercer acción judicial a fin de que se dicten las medidas necesarias para disminuir el peligro o la amenaza. El presidente también puede expedir resoluciones administrativas, exigibles ante tribunales, para obligar a la limpieza, obtener acceso e inspeccionar plantas o contenedores, conseguir muestras, ordenar que se cumpla con solicitudes de información, así como cualquier otro recurso necesario para detener el peligro. Por ejemplo, el descubrimiento de cilindros defectuosos llenos de material peligroso puede ocasionar que el propietario del sitio tenga que contratar a una persona calificada para que lleve a cabo lo necesario a fin de prevenir la amenaza que representan estos cilindros, presentar a la EPA un plan con calendario de las operaciones de respuesta, así como informes de trabajo semanales. El incumplimiento de la orden basada en el artículo 106 puede ocasionar una sanción, además de multas y daños punitivos.

La EPA ha utilizado las facultades otorgadas por el artículo 106 de la CERCLA para expedir la mayoría de sus resoluciones administrativas en casos de urgencia.

3. *Ley de Agua Limpia*

El objetivo de la Ley de Agua Limpia es proteger y suministrar actividades de control de contaminación en cursos de agua. En la CWA hay dos disposiciones para reducir los riesgos, el artículo 504 y el artículo 311.

El artículo 504 de la CWA representa la única facultad para enfrentar riesgos inminentes y sustanciales que requiere como medida acciones judiciales y no permite resoluciones administrativas. De acuerdo con esta facultad, el administrador de la EPA

¹³ En *Reilly Tar & Chem. Corp.*, 546 F. Supp. 1100, 1111 (D. Minn., 1982), el tribunal decidió que “las disposiciones sobre peligro inminente del artículo § 106(a) son aún más amplias que las determinadas en el artículo § 7003”.

una vez que reciba pruebas de una fuente contaminante [...] que represente un riesgo inminente y sustancial para la salud o el bienestar de las personas y dicho riesgo atente contra los medios de vida de estos individuos, podrá interponer una demanda [...] en el juzgado de distrito competente para limitar a cualquier persona que está causando [...] la contaminación presunta a fin de que detenga la descarga de contaminantes [...] o emprenda alguna otra medida que sea necesaria”.¹⁴

Dado que la CWA otorga, en otros artículos, la facultad de expedir órdenes de cumplimiento y evaluar sanciones administrativamente, no se utiliza mucho el artículo 504. Sin embargo, se trata de una disposición útil que aborda amenazas a largo plazo contra la salud o el bienestar de las personas. Por ejemplo, el daño a la industria turística causado por sedimentos o aguas contaminadas puede afectar los medios de vida de la gente y, por lo tanto, sujetarse a la medida establecida en el artículo 504.

El artículo 311 de la Ley de Agua Limpia también se conoce como la Ley de Contaminación por Petróleo (*Oil Pollution Act*, OPA), cuyo propósito es evitar fugas de petróleo. Aunque la OPA no crea nuevas facultades de limpieza para la EPA, le permite recuperar los costos incurridos durante la limpieza de las descargas de petróleo conducida conforme a lo dispuesto en la CERCLA o la CWA. Además, si una descarga representa una amenaza sustancial para el bienestar o la salud pública, el artículo 311(c) establece que “el presidente ordenará la realización de todas las medidas federales, estatales y privadas para eliminar la descarga y mitigar o prevenir la amenaza de descarga”. Más aún, el artículo 311(e) señala que cuando se determine que “puede existir una amenaza sustancial e inminente para el bienestar o la salud pública de Estados Unidos, incluidos flora y fauna marina y silvestre, propiedad pública y privada, costas, playas y otros recursos naturales vivientes o no bajo la jurisdicción o el control de Estados Unidos”, el presidente podrá “garantizar medidas contra cualquier persona necesarias para disminuir dicho riesgo, o [...] emprender otras acciones [...] incluida la expedición de resoluciones administrativas que puedan requerirse para proteger el bienestar y la salud pública”. Los juzgados de distrito también otorgan medidas en los términos de este artículo.

¹⁴ Artículo 504, CWA.

4. *Ley de Agua Potable*

La Ley de Agua Potable garantiza la calidad del agua y prepara programas para reducir o eliminar la contaminación de las aguas del subsuelo en los sistemas de agua públicos. El artículo 1431 de la SDWA establece la normatividad nacional sobre agua potable que dicta los niveles máximos de contaminantes específicos, así como las técnicas de tratamiento. Con base en esta disposición, la EPA puede exigir resoluciones para proteger la salud pública o comenzar acciones civiles para obtener un recurso por vía judicial, incluidas órdenes restrictivas, medidas precautorias o medidas permanentes cuando el administrador:

Reciba información acerca de la probabilidad de ingreso o de la presencia de un contaminante en un sistema de agua público o en una fuente subterránea de agua potable, el cual puede generar un riesgo inminente y sustancial para la salud humana, y las autoridades estatales y locales competentes no han actuado para proteger la salud pública.

Los tribunales han sostenido que la facultad otorgada en el artículo 1431 de la SDWA, al igual que la facultad prevista en el artículo 7003 de la RCRA, no se limita a situaciones de urgencia. Antes bien, la medida precautoria puede concederse cuando existe riesgo de daño, sin que se requiera la amenaza de un daño irreparable.¹⁵ Por ejemplo, el descubrimiento de las muestras de agua tomadas de un sistema de agua público de la ciudad resultó positiva en cuanto a la presencia de bacterias coliformes fecales y totales, y la ciudad no dio aviso a los residentes afectados y a la dependencia ambiental estatal, lo que generó la expedición de una resolución administrativa de la EPA. La medida ordenada incluyó: 1) la cloración del suministro de agua; 2) la difusión de un aviso público a los usuarios del agua alertándolos sobre la presencia de la bacteria coliforme; 3) la obtención diaria de muestras de agua, y 4) la aplicación de un plan aprobado por la EPA para suministrar agua que no excediera del nivel máximo de contaminantes consistentes en bacterias coliformes fecales y totales.

¹⁵ *United States v. Price*, 688 F. 2d 204, 211 (3d Cir. 1982).

5. *Ley de Aire Puro*

El propósito de la Ley de Aire Puro (CAA) es reducir el neblumo y la contaminación atmosférica. En la CAA se incluyen dos disposiciones para reducir los riesgos, el artículo 303 y el artículo 112(r).

El artículo 303 de la CAA autoriza a la EPA a dar comienzo a una acción judicial o emitir una resolución administrativa a fin de suprimir el riesgo sustancial e inminente para la salud pública, el bienestar o el medio ambiente, causado por la emisión de contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, se ordenó a un fabricante de almohadas de fibra y hule espuma que cesara todas sus operaciones porque se descubrió que estaba emitiendo vapores orgánicos no identificados que representaban un peligro para la salud pública. La resolución ordenó al fabricante que no operará hasta que demostrara que podía hacerlo sin generar un riesgo sustancial e inminente para los ciudadanos. Además, se solicitó a la compañía que presentará un plan en el que se detallara su capacidad de operación segura.

A fin de prevenir la liberación accidental de químicos de fuentes estacionarias y, por ende, evitar la necesidad de responder a la misma, el Congreso promulgó en 1990 el artículo 112(r) de la CAA. En esta disposición se exige a los propietarios y operadores de fuentes estacionarias detectar y prevenir o minimizar las consecuencias de emisiones accidentales siempre que se presenten sustancias muy peligrosas en una instalación. Las reglas de este artículo definen los requisitos que deben satisfacer estas instalaciones y determina las fechas de cumplimiento. En caso de una emisión real o amenaza que pueda provocar un peligro sustancial e inminente para el bienestar, la salud pública o el medio ambiente, el artículo 112(r) (9) otorga a la EPA la facultad de expedir resoluciones y buscar medidas por vía judicial.

6. *Ley de Control de Sustancias Tóxicas*

El propósito de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) es reglamentar la manufactura, el uso, la distribución comercial y la eliminación de sustancias químicas. Actualmente, en Estados Unidos se producen más de 75,000 sustancias químicas industriales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7. de la TSCA, si la EPA determina que la manufactura, el procesamiento o la distribución de una sustancia o mezcla

química, o de un artículo que los contenga, es inminentemente peligroso, puede dar comienzo a una acción civil para su decomiso o expedirse una resolución que otorgue las medidas necesarias contra cualquier persona que fabrique, importe, procese, distribuya comercialmente, utilice o elimine esa sustancia o mezcla.

7. Ley Federal sobre Insecticidas, Plaguicidas y Rodenticidas

La Ley Federal sobre Insecticidas, Plaguicidas y Rodenticidas (FIFRA) controla la distribución, venta y uso de plaguicidas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 6. de la FIFRA, la EPA puede suspender el registro de un plaguicida en caso de que determine que esta medida es necesaria para prevenir un “riesgo inminente”, el cual se define como una consecuencia adversa injustificada para el medio ambiente o un riesgo injustificado para la supervivencia de especies en peligro o amenazadas. El administrador tiene 90 días para expedir un aviso de intención dirigido a cancelar el registro del plaguicida o cambiar su clasificación antes de que expire la resolución de urgencia.

URGENT SITUATIONS*

Eva KREISLER

I. INTRODUCTION

Environmental agencies are often faced with situations that call for a quick response, given the threat these situations may pose to human health or the environment. For example, a raw sewage pipeline overflows into the public waterways, or there is improper removal of asbestos near a school or playground. In order to address these urgent situations, authorities dealing with imminent and substantial endangerment are invested in environmental agencies, which allows them to issue orders requiring immediate action in order to avert threats to the environment or public health. These orders, which are enforceable in court, may dictate a specific course of action or restrain the activity responsible for the hazard.

This article provides a broad overview of the various imminent and substantial endangerment authorities that exist in the United States. During the seminar, the panelists provided a more in-depth discussion of some, or all, of these legal instruments.

II. IMMINENT AND SUBSTANTIAL ENDANGERMENT AUTHORITIES IN THE UNITED STATES

In the United States, the Environmental Protection Agency has a variety of statutory authorities to address urgent situations. These provisions are included in environmental statutes and were broadly drafted by Congress to give EPA the right to seek judicial relief or take appropriate

* 2008.

and immediate action to eliminate threats to human health and the environment.

Imminent and substantial endangerment authorities are found in the Resource Conservation and Recovery Act,¹ the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act,² the Clean Water Act,³ the Safe Drinking Water Act,⁴ the Clean Air Act,⁵ and the Toxic Substances Control Act.⁶ These authorities have strong similarities and may be combined by EPA to abate multi-media emergencies.

1. *Resource Conservation and Recovery Act*

The Resource Conservation and Recovery Act's (RCRA) goals are to protect human health and the environment from the potential hazards of waste disposal, to conserve energy and natural resources, to reduce the amount of waste generated, and to ensure that wastes are managed in an environmentally sound manner.

Under Section 7003(a) of RCRA, whenever the EPA Administrator receives evidence that past or present improper handling of hazardous waste⁷ *may present* an "imminent and substantial endangerment" to health or the environment, the Administrator may issue an administrative order or initiate a judicial action to restrain any person from handling, storing, treating, transporting or disposing of hazardous waste.⁸ The Administrator may also order such person to clean up or take other corrective action as may be necessary to contain the hazard.

¹ Section 7003 of RCRA, 42d USC, § 6973.

² Section 106 of CERCLA, 42d USC, § 9606(a).

³ Sections 504(a) and 311(c) and (e) of the CWA, 33d USC, §§ 1364(a), 1321(c) and (e).

⁴ Section 1431 of the SDWA, 42d USC, § 300i(a).

⁵ Section 303 of the CAA, 42d USC, § 7603(a).

⁶ Section 8 of TSCA, 15th USC, § 2606(b).

⁷ "Hazardous waste to mean a solid waste, or combination of solid wastes, which because of its [...] characteristics may (A) cause or significantly contribute to an increase in mortality or [...] serious [...] illness; or (B) pose a substantial present or substantial hazard to human health or the environment when improperly [...] managed" (RCRA § 1004[5]).

⁸ "Person" includes any past or present generator, past or present transporter, or past or present owner or operator of a treatment, storage or disposal facility.

An “endangerment” has been defined by the courts to be an actual, threatened, or potential harm to health or the environment.⁹ The words “may present” in the statute stipulate that only a risk of harm exist, no proof of actual or immediate harm is required. An “imminent” endangerment exists when the present conditions indicate that there may be a future risk to health or the environment even if the risk does not materialize for many years.¹⁰ A “substantial” endangerment exists when there is a reasonable cause for concern that health or the environment may be at risk.¹¹

RCRA Section 7003(a) authority may be used, for example, when a facility is found to be improperly handling hazardous waste. In such a situation, the facility may be ordered to immediately stop the receipt of additional hazardous waste until compliance with the terms of an order detailing corrective action is achieved. Failure to comply with any order issued under Section 7003(a) of RCRA may also result in a financial penalty.¹²

2. Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act

The Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) gives the federal government broad authority to clean up contaminated sites. Section 106 of CERCLA is a broadly written provision which differs from RCRA Section 7003 in that it authorizes judicial action or issuance of an administrative order when there is an actual or *threatened* imminent and substantial endangerment to the public health, welfare or the environment.¹³

Under Section 106, the President, upon determining that there may be an imminent and substantial endangerment to the public health or wel-

⁹ *United States v. Valentine*, 856 F. Supp. 621, 626 (D. Wyo. 1994).

¹⁰ *Ibid.* See also, *United States v. Conservation Chemical II*, 619 F. Supp. 162, 194 (WD Mo. 1985) and *Dague v. City of Burlington*, 935 F.2d 1343, 1356.

¹¹ *Conservation Chemical*, 619 F. Supp., at 194.

¹² 42d USC, § 6973(b).

¹³ In *Reilly Tar & Chem. Corp.*, 546 F. Supp. 1100, 1111 (D. Minn. 1982), the court found that “the imminent hazard provisions of § 106(a) are even broader than those articulated in § 7003”.

fare or the environment from an actual or threatened release of hazardous material, may bring judicial action to obtain relief as may be necessary to abate the hazard or threat. The President may also issue administrative orders, which are enforceable in court, to compel cleanup, obtain access to and inspect facilities or vessels, obtain samples, enforce requests for information or any other actions as may be necessary to stop the danger. For example, the discovery of dumped drums full of leaking hazardous materials may result in the owner of the site's having to retain a qualified contractor to conduct the necessary activities to avert the threat of the leaking drums, submit to EPA a plan and schedule for the response operations and submit weekly reports of the work. Failure to comply with a 106 order may result in a penalty in addition to possible fines and punitive damages.

EPA has used CERCLA Section 106 authorities to issue the majority of its emergency power administrative orders.

3. *Clean Water Act*

The purpose of the Clean Water Act is to protect and provide for pollution control activities in waterways. The CWA has two provisions to abate dangers, Section 504 and Section 311.

Section 504 of the CWA is the only imminent and substantial endangerment authority which requires a judicial action for relief and does not allow for administrative orders. Under this authority, the EPA Administrator

upon receipt of evidence that a pollution source [...] is presenting an imminent and substantial endangerment to the health of persons or to the welfare of persons where such endangerment is to the livelihood of such persons, may bring suit [...] in the appropriate district court to immediately restrain any person causing [...] the alleged pollution to stop the discharge of pollutants [...] or to take such other action as may be necessary.¹⁴

Because the CWA has the authority to issue compliance orders and assess penalties administratively in other sections, Section 504 is used seldom. However, it is a useful provision to address long-term threats to the

¹⁴ Section 504, CWA.

health or welfare of persons. For example, harm to the tourist industry caused by polluted waters or sediments may affect people's livelihoods and therefore be subject to action under Section 504.

Section 311 of the Clean Water Act is also known as the Oil Pollution Act (OPA). The purpose of the OPA is to prevent oil spills. While the OPA does not create any new cleanup authorities for EPA, it allows the Agency to recover costs incurred during the cleanup of oil discharges conducted under CERCLA or the CWA. In addition, if a discharge is posing a substantial threat to public health or welfare, Section 311(c) states that "the President shall direct all Federal, State, and private actions to remove the discharge or to mitigate or prevent the threat of the discharge". Moreover, Section 311(e) states that when it is determined that "there may be an imminent and substantial threat to the public health or welfare of the United States, including fish, shellfish, and wildlife, public and private property, shorelines, beaches, habitat, and other living and nonliving natural resources under the jurisdiction or control of the United States", the President may "secure relief from any person as necessary to abate such endangerment; or [...] take any other action [...] including issuing administrative orders, that may be necessary to protect the public health and welfare". District courts may also grant relief under this section.

4. Safe Drinking Water Act

The Safe Drinking Water Act ensures water quality and develops programs to reduce or eliminate groundwater pollution in public water systems. Section 1431 of the SDWA provides national drinking regulations that dictate maximum contaminant levels for specified contaminants and treatment techniques. Under this provision, the EPA may issue orders to protect the public health or commence a civil action for relief, including a restraining order, a permanent injunction, or a temporary injunction when the Administrator:

[R]eceives information that a contaminant is present in or is likely to enter a public water system or an underground source of drinking water, and the contaminant may present an imminent and substantial endangerment to human health, and the appropriate State and local authorities have not acted to protect the public health.

The courts have held that SDWA Section 1431 authority, like RCRA Section 7003 authority, is not limited to emergency situations. Rather, injunctive relief may be granted when a risk of harm exists without requiring the threat of irreparable harm.¹⁵ For example, the discovery that water samples taken from a city's public water system tested positive for the presence of total and fecal coliform, and the city's failure to notify the affected residents and the state environmental agency, resulted in the issuance of an administrative order by the EPA. The relief ordered included the: 1) chlorination of the water supply, 2) issuance of a public notice to water users alerting them to the presence of coliform, 3) daily sampling of the water, and 4) implementation of an EPA-approved plan to produce water that did not exceed the maximum contaminant level for both total and fecal coliform.

5. *Clean Air Act*

The purpose of the Clean Air Act (CAA) is to reduce smog and air pollution. The CAA has two provisions to abate dangers, Section 303 and Section 112(r).

Section 303 of the CAA, authorizes the EPA to initiate judicial action, or issue an administrative order, to abate imminent and substantial endangerment to public health, welfare, or the environment caused by emissions of air pollutants. For example, a foam and fiber pad manufacturer was ordered to cease all operations because it was found to be emitting unidentified organic vapors which were presenting a public health hazard. The order required that the manufacturer not operate until it could demonstrate that it could do so without presenting an imminent and substantial endangerment to the public. In addition, the company was required to submit a plan detailing its ability to operate safely

In order to prevent accidental releases of chemicals from stationary sources and so avoid the need to respond to such releases, Congress enacted Section 112(r) of the CAA in 1990. This provision requires that owners and operators of stationary sources detect and prevent, or minimize the effects of, accidental releases whenever extremely hazardous substances are present at a facility. The regulations issued under this

¹⁵ *United States v. Price*, 688 F. 2d 204, 211 (3d Cir. 1982).

section define the requirements that must be met by these facilities and establish dates for compliance. In the case of an actual or threatened release that may cause an imminent and substantial endangerment to human health or welfare or to the environment, Section 112(r) (9) gives EPA the authority to issue orders and seek judicial relief.

6. Toxic Substances Control Act

The purpose of the Toxic Substances Control Act (TSCA) is to regulate the manufacture, use, distribution in commerce, and disposal of chemical substances. Currently, 75,000 industrial chemicals are manufactured in the US. Under TSCA Section 7, if the EPA determines that the manufacture, processing or distribution of a chemical substance, mixture, or article containing such a substance or mixture is imminently hazardous, it may commence a civil action for its seizure or issue an order to secure necessary relief against any person who manufactures, imports, processes, distributes in commerce, uses, or disposes of that substance or mixture.

7. Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act

The Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act controls the distribution, sale and use of pesticides. Under FIFRA Section 6, the EPA may suspend a pesticide registration if it determines that this is necessary to prevent an “imminent hazard”. An “imminent hazard” is defined as an unreasonable adverse effect on the environment or an unreasonable hazard to the survival of a threatened or endangered species. The administrator then has 90 days to issue a notice of intent to cancel the registration of the pesticide or change its classification before the emergency order expires.